En Madrid, a 04 de julio de 2025

¿QUÉ OCURRE SI NO SE RECIBE O NO SE QUIERE RECIBIR LA COMUNICACIÓN DE INICIO DE MASC? PROBLEMÁTICAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS MASC DE LA LO 1/2025: LA ACREDITACIÓN DEL MASC. LA RECEPCIÓN.

Tras la entrada en vigor de la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante, «LOMESPJ»), se abre un mundo de posibilidades y dudas sobre los medios alternativos de soluciones de controversias (en adelante, «MASC») y, en especial, en relación con el requisito de procedibilidad, o lo que es lo mismo, cómo acreditamos haber acudido a un MASC para presentar la demanda.

1. ACREDITACIÓN DEL INTENTO DE NEGOCIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROCESO SIN ACUERDO.

A este respecto, la LOMESPJ establece en su artículo 10 los métodos de acreditación del intento de negociación. En concreto, en su apartado primero establece:

*«1. A los efectos de acreditar que se ha intentado una actividad negociadora previa y cumplir el requisito de procedibilidad, dicha actividad negociadora o el intento de la misma **deberá ser recogida documentalmente.**»*

En su apartado segundo se recogen los requisitos de forma que deberá cumplir ese documento acreditativo:

- Firma de ambas partes.
- Identidad de las mismas.
- En su caso, identidad de los profesionales o expertos que hayan participado asesorándoles.

- Fecha.
- Objeto de la controversia.
- Fecha de las reuniones.
- En su caso, declaración responsable de que ambas partes han intervenido de buena fe.

Hasta aquí, la ley no plantea problemas, pero ¿qué ocurre si no hay acuerdo o las partes no quieren reunirse y/o dejar constancia de ello?

2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DE DEMANDA EN CASO DE TERMINACIÓN DEL MASC SIN ACUERDO.

Se entenderá que se ha producido una terminación del proceso sin acuerdo y, por tanto, se entiende cumplido el requisito de procedibilidad y se puede acudir a la vía jurisdiccional en los supuestos señalados en el artículo 10.4 de la LOMESPJ, a saber:

«a) Si transcurrieran treinta días naturales a contar DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN de la solicitud inicial de negociación por la otra parte y no se mantuviera la primera reunión o contacto dirigido a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito.

b) Si, una vez iniciada la actividad negociadora, transcurrieran treinta días desde que una de las partes haga una propuesta concreta de acuerdo a la otra, sin que se alcance acuerdo ni se obtenga respuesta por escrito. El plazo de treinta días comenzará a contar DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN de la propuesta concreta de acuerdo.

c) Si transcurrieran tres meses desde la fecha de celebración de la primera reunión sin que se hubiera alcanzado un acuerdo. No

obstante lo anterior, las partes tienen derecho a continuar de mutuo acuerdo con la actividad negociadora más allá de dicho plazo.

d) Si cualquiera de las partes se dirige por escrito a la otra dando por terminadas las negociaciones, quedando constancia del intento de comunicación de ser esa su voluntad.» (énfasis, subrayado y mayúsculas añadidas).

Como se puede apreciar, la ley establece un plazo de 30 días naturales a contar desde la recepción del intento de negociación, para entender cumplido el requisito de procedibilidad. Ya sea por no tener respuesta de la otra parte una vez iniciado (emisión de oferta durante las negociaciones sin contestación ni acuerdo) o simplemente, por no obtener respuesta al intento de inicio del MASC (pero siempre partiendo de la base de que se ha recibido la comunicación).

3. ELEMENTO CLAVE: LA RECEPCIÓN

La LOMESPJ hace especial hincapié en la recepción como momento a partir del cual se comienzan a computar los plazos. En concreto, y siendo los preceptos más relevantes a estos efectos, así se prevé en los artículos 7 (efectos de la apertura del proceso de negociación y de su terminación sin acuerdo) y 10 (acreditación del intento de negociación y terminación del proceso sin acuerdo).

4. PERO, ¿QUÉ OCURRE SI NO SE RECIBE O NO SE QUIERE RECIBIR LA COMUNICACIÓN DE INICIO DE MASC?

Pues bien, la LOMESPJ sólo prevé la «no recepción», en concreto el «intento de comunicación» para el reinicio o reanudación de plazos a efectos de prescripción o

caducidad de acciones (artículo 7.1), pero en ningún caso se prevé a efectos de la acreditación del intento del MASC.

De hecho, hasta en los casos en los que se prevé expresamente como cumplido el requisito de procedibilidad, aún sin respuesta a la solicitud inicial de negociación (artículo 7.3), se establece que la fecha de la que se debe partir es la de **la recepción** de la solicitud de negociación. Lo mismo ocurre con el artículo 10.2, sobre la acreditación del intento de negociación:

«En su defecto, podrá acreditarse el intento de negociación mediante cualquier documento que pruebe que la otra parte ha recibido la solicitud o invitación para negociar o, en su caso, la propuesta, en qué fecha, y que ha podido acceder a su contenido íntegro.» (énfasis y subrayado añadidos).

Por ello, en el caso de que no se reciba la comunicación o no se quiera recibir, según la redacción actual de la ley y, ante la falta de jurisprudencia, nos encontraríamos en una situación en la que el requerido (futuro demandado) puede impedir nuestro acceso a la jurisdicción. En otras palabras, la ley otorga al requerido una herramienta para vulnerar el acceso a la tutela judicial efectiva del requirente.

Al no recibir (consciente o inconscientemente), no puede comenzar a computarse el plazo de 30 días naturales desde la «recepción» como exige el artículo 10.4.a), teniendo como consecuencia necesaria la imposibilidad de acreditar el intento de negociación y, a la postre, la imposibilidad de cumplir el requisito de procedibilidad, suponiendo la inadmisión de la futura demanda.

Una aplicación rígida de este requisito, con esta casuística no tan excepcional (falta voluntaria de recepción), lograría precisamente lo que pretende la ley, que no se acuda a la vía jurisdiccional, si bien por un motivo muy distinto. La *ratio legis*

obedece al propósito de resolver los conflictos mediante acuerdos extrajudiciales, evitando así una gran litigiosidad, pero la realidad es que dicha litigiosidad se va a evitar porque al dejar en manos del requerido el cumplimiento del requisito de procedibilidad, el requirente puede quedar privado de su derecho a acceder a la jurisdicción.

5. POSIBLES SOLUCIONES

Actualmente, debido a la novedad de la norma, no contamos con jurisprudencia que la interprete y colme estas lagunas normativas. Por ello, hemos acudido a las distintas propuestas de unificación de criterio de jueces y letrados de la administración de justicia, que se han ido publicando desde la entrada en vigor de la LOMESPJ.

De las publicadas hasta ahora, las más significativas a efectos de esta nota son:

- La propuesta de unificación de criterios sobre la incidencia de los MASC en la jurisdicción civil del **Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia** de 02 de abril de 2025.
- Los criterios de unificación de actuación de los **LAJ de Barcelona** ante la introducción del requisito de procedibilidad por la lo 1/2025 (medio adecuado de resolución de controversias, MASC)
- El acuerdo de unificación de criterios de la **Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona** – 8 de abril de 2025.
- La unificación de criterios del requisito de procedibilidad de los MASC: **Decanato de los juzgados de las Palmas de Gran Canaria**

Tanto la propuesta de unificación del Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, como la del Decanato de los juzgados de las Palmas de Gran Canaria, parten de la necesidad de acreditación de la recepción (apartados 12 y 4 de las respectivas propuestas).

En una primera aproximación, y con tal exigencia, podríamos pensar que nos encontramos con la misma problemática que con la redacción de la propia ley, pero ambas en sus apartados siguientes abren la posibilidad a una discreción del tribunal para salvar la falta de recepción.

Así, el Ilustre Colegio Nacional, establece en su apartado 13 que, *«El principio pro actione asegura que el acceso a la justicia no quede supeditado a la colaboración o respuesta del requerido, permitiendo que se consideren suficientes los esfuerzos razonables del demandante para acreditar el intento de MASC, incluso si no hay contestación»*. (énfasis añadido).

Si bien no hace mención expresa a la no recepción por parte del requerido, prevé un sistema para evitar maniobras obstruccionistas y refuerza la idea de que el cumplimiento del requisito depende de la iniciativa del actor, no de la voluntad del contrario. Para ello, establece un régimen de discrecionalidad del juez, en su apartado 14 que denomina *«esfuerzo razonable del demandante»*, que parte de la presunción de que *«el requisito de procedibilidad queda cumplido si el demandante realiza al menos dos intentos documentados de contacto mediante medios distintos, como burofax, correo electrónico o SMS, salvo que el requerido demuestre lo contrario con prueba sólida»*. (énfasis añadido).

Como se desprende de la propia redacción, se establece un criterio (dos intentos por medios distintos) por el cual se constituye una presunción *iuris tantum* del cumplimiento del requisito de procedibilidad, dando un amplio margen de discrecionalidad al juez para aquellos casos que caigan fuera del marco expresamente previsto en la LO 1/2025.

Por su parte, el Decanato de los jueces de las Palmas de Gran Canaria, da un mayor desarrollo a la flexibilización del criterio de acreditación del MASC, ya que, aun

partiendo la máxima de la necesidad de acreditar la recepción de la propuesta inicial por el requerido, establece:

«no puede admitirse, en aplicación del principio pro actione, que el acceso a la jurisdicción dependa de la voluntad del demandado (ex art. 1256 CC). Por todo ello, en casos en que no sea posible acreditar la recepción, debe aplicarse la doctrina del TC contenida, por todas, en las SSTC 82/2000, de 27 de marzo, 145/2000, de 29 de mayo y 6/2003, de 20 de enero, según las cuales “los actos de comunicación producen plenos efectos cuando su frustración se debe únicamente a la voluntad expresa o tácita de su destinatario, o a la pasividad, desinterés, negligencia, error, o impericia de la persona a la que va destinada...”».

6. CRITERIOS DE UNIFICACIÓN

A continuación, hemos recogido y extractado, de los criterios de unificación más relevantes que se han ido publicando desde la publicación de la LOMESPJ, las claves que pueden dar luz a la laguna de la no recepción.

6.1. CRITERIOS DE UNIFICACIÓN DE ACTUACIÓN DE LOS LAJ DE BARCELONA ANTE LA INTRODUCCIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD POR LA LO 1/2025

Establecen un listado de qué medios se consideran adecuados y cuáles no para la acreditación del requisito de procedibilidad. Finalmente, incluye una previsión para salvar casos como la no recepción, que es una declaración responsable. Este último criterio, nace de una aplicación extensiva del modificado artículo 264.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, «LEC»), que prevé exclusivamente la declaración responsable para el caso de imposibilidad de llevar a cabo el MASC por desconocimiento del domicilio o medio por el que se le pueda notificar.

Listado de medios adecuados y excluidos:

«Acreditación documental de fecha, recepción y acceso al contenido:

Medios que se aceptan de acreditación:

- a) *notificación positiva*
- b) *Mail certificado (buromail)*
- c) *Burofax*
- d) *Correo ordinario certificado, siempre que conste el contenido de lo enviado*
- e) *Correo electrónico, siempre que conste la recepción y el contenido de lo enviado.*
- f) *Acta notarial*
- g) *Medio pactado: si las partes han pactado comunicarse por un medio electrónico se admite, o si es un correo electrónico en que ha intervenido un 3o de confianza.*

Excluidos:

- a) *No se aceptarán conversaciones whats-app, teléfono, o SMS.*
- b) *Medios que se aceptan de acreditación: notificación negativa.*

Declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido. (art. 264.4 LEC). El uso de esta declaración ha de estar reservado a casos de absoluto desconocimiento. Si del contexto de la demanda se deduce un domicilio conocido, se solicitará subsanación de acreditación del MASC.

Se considera conveniente que se presente declaración responsable de imposibilidad en los siguientes casos:

-si una de las partes se niega a firmar el documento conjunto acreditativo después de la negociación.

-si no se puede acreditar la entrega de la solicitud de negociación (por falta de recepción efectiva, fecha y/o accesibilidad a contenido).

-si el destinatario se niega a recibirla.» (énfasis añadido).

Además, establece una serie de previsiones en función de la voluntad de las partes a la hora de establecer en los contratos que los vinculen (en caso de existir) la posibilidad de acudir a un MASC concreto, medio de notificación o domicilio a efectos de notificaciones. A destacar, además, que no considera conveniente (por ser demasiado gravoso) realizar una averiguación domiciliaria a través del auxilio judicial para notificar al requerido/demandado, sino que recomiendan la presentación de demanda junto con la declaración responsable mencionada anteriormente. A su vez, en tal caso, prevé la admisión de la demanda y una vez emplazado el demandado, derivar el litigio a un MASC, conforme a los establecido en el artículo 19.5 LEC.

«Se ha de tener en cuenta si hay un lugar para notificaciones previsto legalmente, en arrendamientos o propiedad horizontal, o un domicilio o medio pactado.

*Se considera **necesario el control de la coincidencia** del medio de comunicación elegido para remitir la solicitud de negociación del MASC, con el **medio acordado en el contrato entre las partes** en conflicto para las comunicaciones derivadas del mismo.*

No se considera conveniente admitir la solicitud de auxilio judicial para averiguación del domicilio y posterior intento de negociación

cuando se presente demanda con declaración responsable de la parte de la imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial, por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerido.

En tal caso, puesto que no ha sido posible llevar a cabo la actividad negociadora previa, se considera que, admitida la demanda, y realizada la averiguación, una vez constatado el emplazamiento positivo de la parte demandada, se podrá plantear a las partes la posibilidad de derivar el litigio a un MASC conforme prevé el artículo 19.5 LEC.

c) Documento firmado por tercero neutral.

La conciliación privada cabe ante ejercientes del colegio de la abogacía, procura, graduados sociales, economistas, notariado o registradores de la propiedad o cualquier otro colegio reconocido legalmente. Se considera necesaria la comprobación del número de colegiado del profesional actuante en alguno de los colegios que indica la ley.» (énfasis añadido).

6.2. ACUERDO DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE LA JUNTA DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DE BARCELONA

El presente acuerdo de unificación de criterios también se centra en la problemática derivada de la notificación (o la falta de ella) y adopta una serie de pautas para acreditarla, utilizando también como cajón de sastre la declaración responsable.

«La exoneración del cumplimiento del requisito previo de procedibilidad por la imposibilidad de llevar a cabo la actividad

negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada o el medio por el que puede ser requerida se considerará concurrente en el supuesto de haberse intentado la notificación en los diferentes domicilios que consten en la documentación intercambiada por las partes y sean de acceso público conforme al art. 156.2 LEC.

Si posteriormente se acredita por una de las partes que existía otro domicilio que podía ser conocido por la contraparte, tal falta de diligencia en la notificación será objeto de valoración en sede de imposición de costas procesales art. 394.1. párr.2º LEC o mediante la imposición de la correspondiente multa por abuso del servicio público de justicia art. 247 LEC.

Si tal desconocimiento no fuera excusable, dará lugar a la apreciación del incumplimiento del requisito de procedibilidad del artículo 5.1 de la LO 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el punto 5 del presente acuerdo.

La imposibilidad de llevar a cabo la actividad negociadora previa a la vía judicial por desconocer el domicilio de la parte demandada se habrá de hacer constar en la declaración responsable señalada en el artículo 264.4 LEC con indicación del motivo de tal imposibilidad.

Se considera conveniente que se presente la declaración responsable referida en los casos de imposibilidad de entrega de la solicitud, negativa a su recepción u otros supuestos análogos, debidamente acreditados documentalmente.

Justificación: El inicio de la actividad negociadora previa a la vía jurisdiccional exige una diligencia adecuada en el intento de notificación de la misma, máxime cuando se trata de domicilio fijado contractualmente o en documentación intercambiada o accesible de que disponen previamente las partes, y tal exigencia debe permitir que, en caso de alegarse imposibilidad de llevar a cabo la notificación, se proceda judicialmente al análisis de la adecuación de la actividad desarrollada por la parte en tal sentido, en atención a la causa consignada en la declaración responsable.

-El medio adecuado de solución de controversias consistente en la oferta vinculante confidencial regulada en el artículo 17 de la LO 1/2025 de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia no puede limitarse a la mera formulación de una oferta, debiendo quedar constancia significativa, clara y transparente de la voluntad y actividad negociadora, a los efectos de alcanzar un acuerdo que evite el pleito, siempre que se acompañen a la oferta los documentos que acrediten la efectiva existencia de la negociación y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 del LRCSCVM u otras leyes especiales.

Justificación: La mera formulación de una oferta vinculante confidencial en el seno de una controversia en la que debe realizarse una actividad negociadora previa a la vía jurisdiccional sería contraria y vaciaría de contenido dicha actividad negociadora previa, erigiéndose en una suerte de trámite unilateralmente configurado.

-El cumplimiento por las partes del requisito de procedibilidad para la iniciación de la vía jurisdiccional mediante la negociación

directa o, en su caso, a través de sus abogados o abogadas no puede limitarse a la mera formulación de una oferta sin negociación alguna.

Justificación: La mera formulación de una oferta en el seno de una controversia en la que intervengan directamente las partes o abogados o abogadas en la que debe realizarse una actividad negociadora previa a la vía jurisdiccional sería contraria y vaciaría de contenido dicha actividad negociadora previa, erigiéndose en una suerte de trámite unilateralmente configurado.» (énfasis y subrayado añadidos)

6.3. UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LOS MASC: DECANATO DE LOS JUZGADOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Por último, hemos creído conveniente traer a colación estos criterios por cuanto se centran precisamente en la problemática de la recepción. En ellos se indica, cómo acreditar la recepción, los medios admitidos para ello y cuándo se entiende cumplido el requisito de procedibilidad pese a no haberse recibido.

«4.- ACREDITACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL INTENTO DE NEGOCIACIÓN: MEDIOS APTOS.

Es decir, y como corolario de lo anterior, hay dos formas a través de las cuales una reclamación o propuesta de negociación intentada puede cumplir con las condiciones del art. 10 y art. 17.4 LOMESPJ, por ejemplo:

a) A través de un medio que pruebe de modo fehaciente la recepción de la comunicación, fecha, contenido y puesta a

disposición (burofax o requerimiento notarial, entre los más empleados).

Debe equipararse al burofax y admitirse: el buro-email y las certificaciones de terceros de confianza, así como las citaciones rehusadas para actos de conciliación o mediación hechas por organismos oficiales (Colegios de Abogados, Notarios, entre otros).

b) Medios telemáticos o físicos no fehacientes (email, sms...), de los que presumir el requisito de la fehaciencia y recepción, por la doctrina antes indicada, a los que debe sumarse el caso en que el requerido se de por enterado por medio no fehaciente (en cuyo caso habrá de aportarse la respuesta suprimiendo los datos de la negociación).

Para ello será necesario agotar todos los medios disponibles (burofax, email, sms...) y realizar varios intentos, para presumir la recepción de la comunicación inicial, pues de su negativa se derivan consecuencias procesales importantes en materia de costas, particularmente la aplicación del art. 394 LEC, que dejará sin costas al demandado en caso de vencer en el pleito.» (énfasis y subrayado añadidos)

7. CONCLUSIÓN

Como hemos ido desgranando a lo largo de este artículo, no existe actualmente respuesta exacta a la problemática de la falta de recepción del intento de MASC, por lo que, ante esta ambigua situación deberemos atenernos a los mencionados criterios de unificación de cada territorio. Sobre todo, a la declaración responsable

que recoge el artículo 264.4º LEC y en la que se van apoyando los distintos criterios de unificación. Esto siempre y cuando las resoluciones que se vayan dictando realicen una aplicación extensiva de la norma para colmar las lagunas que nos deja la reforma. Hasta entonces, no existe respuesta segura.